

AUTO N. 01892

“POR EL CUAL SE DECRETAN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución No. 1466 del 24 de mayo de 2018 modificada por la Resolución No. 2566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, y en concordancia con lo dispuesto en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, y conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que profesionales de la Dirección de Control Ambiental junto con la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, llevaron a cabo operativo de inspección, control y vigilancia, el día 28 de febrero de 2017, al predio ubicado en la Carrera 62 C No. 57 D-21 Sur, de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, (Chip catastral AAA0052YEXS), encontrando que el señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 482784, realiza actividades de comercio al por menor de productos cárnicos, pescados y productos de mar, con procesos de desposte y lavado de superficies.

Que, como consecuencia de las actividades mencionadas, se evidenció que el usuario realizó descargas de aguas residuales no domésticas, de manera directa a la red de alcantarillado público de la ciudad, así como de dispuso sustancias y tejidos animales (sangre, agua sangre), sin contar con un sistema de pretratamiento que garantice la retención de grasas.

Que, en vista de la situación, la Dirección de Control Ambiental procedió a levantar “acta de imposición de medida preventiva de suspensión de actividades en caso de flagrancia” con fecha del 28 de febrero de 2017, suspendiendo las actividades de lavado de superficies con residuos líquidos de tejidos.

Que acto seguido, se emitió el Concepto Técnico No. 00949 de 02 de marzo de 2017, el cual adicionalmente estableció:

“(…)

NORMATIVIDAD VIGENTE
CUMPLE EN MATERIA DE VERTIMIENTOS
<p><i>El usuario genera aguas residuales no domésticas provenientes de las actividades de desposte de canales de ganado, generando vertimientos no domésticos las cuales son recolectadas por canales y cajas de inspección, finalmente al ARND es colectada por una caja de inspección interna, que funciona como pre-sedimentador, antes de ser descargada a la red de alcantarillado público por la carrera 62 C. El establecimiento es objeto del trámite de Registro de Vertimientos en cumplimiento de la Resolución 3957 de 2009. Revisado el sistema FOREST de la Entidad, se verificó que el usuario no cuenta dicho registro. En la evaluación técnica de la operación y manejo de residuos líquidos, se determina que el usuario:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. No cuenta con un sistema de tratamiento que permita el control y tratamiento adecuado de los efluentes, incumpliendo con el decreto 1076, artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. Numeral 3. El cual hace referencia al Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental, y el artículo 23 de la resolución 3957 de 2009, Obligación de instalar unidades de pre-tratamiento.</i> <i>2. Realiza descargas sin control a la red de alcantarillado de sangre, entrañas y pelo, incumpliendo con el artículo 19 de la resolución SDA 3957 de 2009.</i> <i>3. No cuenta con registro de vertimientos, incumpliendo con el artículo 5, Registro de Vertimientos. Todo Usuario que genere vertimientos de aguas residuales, exceptuando los vertimientos de agua residual doméstica realizados al sistema de alcantarillado público está obligado a solicitar el registro de sus vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.”</i>

Que la Dirección de Control Ambiental, por medio de la Resolución No. 596 del 3 de marzo de 2017, procedió a legalizar el acta de imposición, en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la medida preventiva impuesta en flagrancia el día 28 de febrero de 2017, al señor JULIO CESAR ROJAS ALARCON identificado con cédula de ciudadanía No. 482.784, quien realiza la actividad de desposte de carne en canal en el predio ubicado en la Carrera 62 C No. 57D – 21 Sur de la localidad de Kennedy de esta ciudad, consistente en la suspensión del lavado de superficies impregnadas con tejidos (sangre y agua sangre), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.”

Que el anterior acto administrativo fue comunicado, al señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** a través del oficio con Radicado No. 2017EE46998 de 07 de marzo de 2017, así como a la Alcaldía Local de Kennedy a través de Radicado 2017EE46999 de 07 de marzo de 2017.

Que acto seguido, se dio inicio a un proceso sancionatorio de carácter ambiental, en contra del señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON**, por medio del Auto No. 02251 del 31 de julio de 2017, disponiendo en el artículo primero:

“(…) ARTICULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra del señor JULIO CESAR ROJAS ALARCON identificado con cédula de ciudadanía No. 482784., quien realiza actividades de desposte de carne, en el predio ubicado en Carrera 62 C No. 57D – 21 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, por presuntamente disponer a la red de alcantarillado público de sangre, entrañas, viseras y tejidos animales y pelo, sin previo tratamiento; así como por no acatar la prohibición de no disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental.”

Que el anterior acto administrativo, fue notificado por aviso el 31 de mayo de 2018, y publicado en el boletín legal ambiental el 17 de agosto de 2018.

Que luego, se comunicó dicha providencia a la Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, por medio del Radicado No. 2018EE171465 del 24 de julio de 2017, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009

Que dando continuidad al proceso que nos ocupa, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante **Auto No.1307 del 19 de mayo de 2019**, formuló cargos contra el señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 482784, disponiendo:

CARGO PRIMERO. – Disponer de manera directa a la red de alcantarillado público de la ciudad, sustancias o elementos como sangre, entrañas, vísceras, y tejidos animales, infringiendo con ello la prohibición normativa, establecida en el artículo 19 de la Resolución 3957 de 2009, en concordancia con el numeral 3 del artículo 2.2.3.3.4.4 del Decreto 1076 de 2015

CARGO SEGUNDO. – Realizar vertimientos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado público de la ciudad, sin contar con previo tratamiento, ni unidades separadoras de grasas, incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 23 de la Resolución 3957 de 2007.

El precitado auto se notificó mediante edicto el cual fue fijado el 02 de julio de 2019 y desfijado el 06 de julio de 2019, previo envío de citación de notificación personal mediante radicado 2019EE106162 del 19 de mayo de 2019, entendiéndose notificado el día 07 de julio de 2019 término a partir del cual podría presentar escrito de descargos.

II. DESCARGOS

Que una vez hecha la revisión tanto en el sistema **FOREST** de la entidad, como en los documentos que reposan en el expediente **SDA-08-2017-196**, se evidenció que el señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 482784, quien realiza actividades de lavado de áreas, superficies, y comercialización de productos cárnicos, con

procesos de desposte de cabezas de ganado, en el predio de la Carrera 62 C No. 57D – 21 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, no presentó escrito de descargos en ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Consideraciones Generales

Que, durante la etapa probatoria, se pretende obtener los elementos necesarios que proporcionen la efectiva consecución de la certeza respecto de los hechos objeto de debate.

Que previo a la decisión que deba tomarse, es preciso consultar los principios y criterios que rigen el procedimiento en materia de pruebas, tales como los de la conducencia, la pertinencia, la utilidad y el fin de la prueba en torno al tema de prueba procesal y fundamentalmente frente al tema de la investigación de que trata este procedimiento sancionatorio ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, al respecto de los criterios de valoración mencionados anteriormente, el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta), en decisión del diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), Rad. 18093, Consejero Ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, se pronunció de la siguiente manera:

“(…) El artículo 168 del C.C.A. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. (...)”

Que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado¹, la prueba debe ser entendida:

“(…) En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella sino un medio del que nos servimos para establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o incompleto; por su parte para Ricci “la prueba no es un fin por sí mismo, sino un medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el descubrimiento de la verdad” y agrega que “antes de emplear un medio para conseguir

¹Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección “A” CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01(0864-07).

el fin que se persigue es de rigor convencerse de la idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se busca" y por último Framarino anota en su "Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es el medio objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu.

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la prueba debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir el juez al momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor de convicción de un medio o conjunto de medios probatorios. El artículo 168 del C.C.A. prevé que en los procesos que se surtan ante esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con las normas del C.C.A. marginalmente (...)"

Que, con fundamento en la anterior definición, es necesario señalar lo que el Código General del Proceso determina en cuanto a las pruebas, lo siguiente:

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Art. 164 del C.G.P.)
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Art. 165 del C.G.P)
3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Art. 167 del C. G P.)
4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará *in limine* las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Art. 168 del C. G P.)

Que, de acuerdo con lo anteriormente expresado, tenemos que las pruebas son un medio de verificación de las afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con el fin de otorgarle al operador jurídico las pautas necesarias para tomar una decisión.

Que, aunado a lo referido, se tiene que no sólo se necesita allegar oportunamente las pruebas que se pretende hacer valer dentro del proceso, sino que estas deben ser congruentes con el objeto del mismo, igualmente éstas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.

Que el tratadista Nattan Nisimblat en su libro "*Derecho Probatorio - Principios y Medios de Prueba en Particular Actualizado con la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1437 de 2011*", en las páginas 131 y 132, al respecto de los requisitos intrínsecos de la prueba, definió lo siguiente:

“(…) 2.3.1.1. Conducencia.

La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico (elementos ad substantiam actus y ad probationem) (…)

2.3.1.2. Pertinencia.

Inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non relevant. La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el “tema probatorio”. Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate (…)

2.3.1.3. Utilidad.

En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.”

Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de estos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

*“(…) **ARTÍCULO 25. DESCARGOS.** Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor éste, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.”*

Que en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se establece además que: “Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo solicite”.

Que, desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el proceso sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

2. Del caso en concreto:

De conformidad con la normativa, doctrina y la jurisprudencia señaladas de manera precedente, el tema de la prueba se refiere a los hechos que se deben investigar en cada proceso, que para el caso que nos ocupa corresponden a aquellos que llevaron a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente a formular cargos mediante el **Auto No.01307 del 19 de mayo de 2019**, en contra del señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula

de ciudadanía No. 482784, por las conductas evidenciadas en el predio ubicado en la carrera Carrera 62 C No. 57D – 21 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, lo cual hace necesario probar o desvirtuar mediante las pruebas que de forma legal se aporten o practiquen dentro del presente acto administrativo.

Que, en ese sentido, y en razón a que el señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 482784, no presentó escrito de descargos al **Auto No. 01307 del 19 de mayo de 2019**, como quiera que esta Entidad dentro de esta etapa probatoria podrá ordenar de oficio las que estime necesarias, conforme al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, se considera que por guardar directa relación con los cargos imputados, procede la incorporación como pruebas, de las siguientes:

- **Acta de visita técnica de fecha 28 de febrero de 2017, Acta de imposición de medida preventiva en caso de flagrancia de la misma fecha y Concepto Técnico No. 00949 de 02 de marzo de 2017**; siendo los documentos conducentes y necesarios, por cuanto son los medios idóneos para demostrar la existencia de los hechos que dieron origen al incumplimiento de normas de carácter ambiental, teniendo en cuenta que así lo señala el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica que la autoridad ambiental competente, podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

En este sentido, y dado que demuestran una relación directa entre los hechos investigados y las infracciones ambientales formuladas a través del Auto No.00515 del 25 de marzo de 2019, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, cumplen a cabalidad con los requisitos de pertinencia y utilidad.

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que el Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones, ordenó en su artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, en la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA-, como un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera.

Que los Decretos Distritales 109 y 175 de 2009 establecen la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinan las funciones de sus dependencias y dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo dispuesto en numeral 1° del artículo primero de la Resolución No. 1466 del 24 de mayo del 2018 modificada por la Resolución No. 2566 del 15 de agosto de 2018, el Secretario Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos de impulso relacionados con los procesos sancionatorios.

Que, en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta entidad mediante **Auto No. 596 del 3 de marzo de 2017** en contra del señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 482784, quien realiza actividades de lavado de áreas, superficies, y comercialización de productos cárnicos, con procesos de desposte de cabezas de ganado, en el predio de la Carrera 62 C No. 57D – 21 de la localidad de Kennedy de esta ciudad (Chip catastral AAA0052YEXS), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - De oficio, incorporar y ordenar como pruebas útiles, legales y conducentes, dentro del presente proceso sancionatorio de carácter ambiental, los siguientes documentos que obran dentro del expediente **SDA-08-2017-196**:

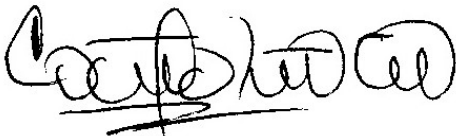
- Acta de visita técnica de fecha 28 de febrero de 2017,
- Acta de imposición de medida preventiva en caso de flagrancia de fecha 28 de febrero de 2017, y
- Concepto Técnico No. **00949 de 02 de marzo de 2017**;

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor **JULIO CESAR ROJAS ALARCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 482784, en la Carrera 62 C No. 57D – 21 de la localidad de Kennedy de esta ciudad; de conformidad con lo señalado en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

ARTÍCULO CUARTO. – Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de mayo del año 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be "César Rojas Alarcón", written over a horizontal line.

**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL****Elaboró:**

MARIA XIMENA DIAZ ORDÓÑEZ C.C: 1010201572 T.P: N/A

CPS: CONTRATO 2020-0602 DE 2020 FECHA EJECUCION: 27/05/2020

Revisó:

MARIA XIMENA DIAZ ORDÓÑEZ C.C: 1010201572 T.P: N/A

CPS: CONTRATO 2020-0602 DE 2020 FECHA EJECUCION: 27/05/2020

Aprobó:**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR C.C: 80016725 T.P: N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 27/05/2020